



Si Somos Americanos, Revista de Estudios
Transfronterizos
ISSN: 0718-2910
sisomosamericanos@unap.cl
Universidad Arturo Prat
Chile

Cajías de la Vega, Magdalena
CRISIS, DIÁSPORA Y RECONSTITUCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS MINEROS
BOLIVIANOS: 1986-2003
Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. X, núm. 2, -, 2010, pp. 61-96
Universidad Arturo Prat
Santiago, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337930338003>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

CRISIS, DIÁSPORA Y RECONSTITUCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS MINEROS BOLIVIANOS: 1986-2003

Crisis, diaspora and reconstitution of the historical memory of the bolivian mining: 1986-2003

Magdalena Cajás de la Vega. magdalenacajjas@yahoo.com
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.

Recibido: marzo 2010. Aprobado: abril 2010.

RESUMEN

Este trabajo da cuenta de las transformaciones que operaron en la gran minería boliviana a fines del siglo XX, luego de la crisis que venía arrastrándose desde 1985 en la explotación del estaño. La caracterización de esta crisis se hace a través de la descripción y los resultados de las demandas de los distintos movimientos sociales y de trabajadores que fueron surgiendo en el proceso de reestructuración de la propiedad minera, poniendo especial énfasis en rol que jugó el Estado boliviano en la redistribución de dicha propiedad. La relevancia que había alcanzado la explotación minera para la economía boliviana, particularmente para las arcas fiscales, va perdiendo su peso a través del conjunto de medidas de los Gobiernos de turno que posibilitan la privatización de la propiedad minera y la consolidación de una economía de mercado, que fortalece las inversiones privadas nacionales y extranjeras en sectores estratégicos de la economía boliviana.

PALABRAS CLAVES: Minería, Estado, Privatización, Bolivia.

ABSTRACT

This paper shows the changes that brought about in the great Bolivian mining industry at the end of the twentieth century, after the crisis that has been dragging on since 1985 in the exploitation of tin. The characterization of this crisis is drawn through the description and results of the demands of the different social and workers' movements that came up in the process of restructuring of the mining property, especially emphasizing the role that the Bolivian state played in the redistribution of that property. The importance that the mining exploitation had caught up for the Bolivian economy, particularly for the fiscal coffers, is

losing influence through the collection of measures of the Government of the moment that make the privatization of the mining property and the consolidation of a market economy possible, that strengthen national and foreign private investments in strategic sectors of the Bolivian economy.

KEYWORDS: Mining, State, Privatization, Bolivia.

I. IMPACTO INICIAL DE LA POLÍTICA DE “RELOCALIZACIÓN” Y LA “DESESTRUCTURACIÓN” DEL VIEJO MOVIMIENTO MINERO EN LA DÉCADA DE LOS 80

El año 1985 marcó una profunda ruptura en la historia del movimiento minero boliviano. La implementación del D.S. 21060 –de agosto de ese año–, que determinó el cierre de la mayoría de las minas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el despido de la mayor parte de la fuerza de trabajo minera, fue un elemento central de ese proceso.

La llamada “relocalización” minera, propuesta por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) junto al decreto citado, fue justificada por la profunda crisis de la minería estatizada, que, por lo demás, había sido un elemento muy importante del desmoronamiento económico que sufrió Bolivia entre 1982 y 1985 bajo el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP).

Apoyado en una coalición de centro derecha aglutinada en el Parlamento boliviano y que incluía al partido del ex-dictador Hugo Banzer –ADN– y tras la derrota electoral de la izquierda, Paz Estenssoro contaba con las condiciones políticas adecuadas para aplicar una Nueva Política Económica (NEP) de orientación neoliberal.

En otros momentos históricos de crisis de la minería del estaño, políticas menos drásticas que las planteadas por el 21060, que intentaron la reducción de la fuerza de trabajo minera y se plantearon estrategias para la desnacionalización paulatina de las minas estatizadas en 1952, no pudieron aplicarse totalmente ya que el movimiento minero luchó denodadamente por evitarlas.

Pero ninguna política anterior es comparable a lo planteado por Paz Estenssoro en 1985, ya que en esta oportunidad se optaba por el cierre definitivo de las minas estatizadas aglutinadas en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el despido de prácticamente la totalidad de los más o menos 30.000 trabajadores mineros que dependían del Estado.

Se estaba, entonces, frente a una situación histórica de “vida o muerte” y sólo la reacción de los trabajadores y su capacidad de presión, movilización y resistencia podían frenar el extremismo de la nueva política minera.

Sin embargo, en los meses posteriores a la dictación del decreto reinó bastante confusión en los centros mineros. Al respecto, no hay que olvidar el desgaste sindical sufrido por la FSTMB durante el gobierno de la UDP, el papel disociador al interior de los sindicatos cumplido por los partidos políticos –principalmente de las distintas corrientes de la izquierda– y los fuertes sentimientos de frustración que reinaban entre los trabajadores tras el triunfo de la derecha en elecciones nacionales.

Por otro lado, desde 1982, la situación económica y social de los trabajadores mineros se había tornado prácticamente insostenible. La crisis económica disminuyó la capacidad adquisitiva de los salarios, se tuvo que soportar el desabastecimiento permanente de las pulperías –a través de las cuales la empresa estatal pagaba parte del salario–, se acrecentaron los problemas de los servicios de salud y educación y, sobre todo, a medida que el precio del estaño descendía en el mercado mundial, los costos de producción se volvían tan altos que la empresa estaba imposibilitada de cumplir sus obligaciones con los trabajadores y con las tareas de producción que ya estaban prácticamente paralizadas¹.

Además, COMIBOL anunció que soportaba un déficit de 46 millones de dólares americanos, planteando que dejaría de pagar regalías a los departamentos productores de estaño, lo que afectó de manera dramática principalmente a Oruro y Potosí, pues La Paz tenía aparte de la minería otras fuentes de ingresos.

El desánimo, los sentimientos de frustración política, la situación crítica de la familia minera, impulsó a centenas de trabajadores a aceptar la “relocalización” y muchas familias comenzaron a abandonar los campamentos mineros². Así se produjo la primera ola de mineros que abandonó las minas desde septiembre de 1985 a agosto de 1986, alcanzando el número de ellos a aproximadamente 8.000 trabajadores, es decir, un poco menos de un tercio del total de obreros dependientes de COMIBOL, de acuerdo a información del entonces ministro de Minería, Jaime Villalobos (Presencia 12 de agosto de 1986).

Esta primera ola de mineros despedidos, ya que el gobierno nunca se preocupó por “relocalizarlos”, inició la “diáspora” desordenada y forzada de ese sector. A tiempo

¹ En la primera parte de nuestra tesis tratamos con detenimiento las consecuencias de la crisis económica estallada durante el gobierno de la UDP para los mineros y centralmente para los trabajadores de la mina de Huanuni.

² Durante 1985 y 1986 realicé varios viajes a las minas de Siglo XX y Catavi donde ejercí labores académicas en la Universidad Nacional Siglo XX. Durante todas esas visitas tuve la oportunidad de observar de cerca el desmoronamiento del movimiento minero y conversar con los trabajadores sobre sus percepciones en torno a lo que estaba pasando. De esas observaciones surgió el artículo “Notas sobre la crisis del movimiento minero boliviano” publicado en el libro *Crisis del Sindicalismo en Bolivia*, FLACSO-ILDIS, La Paz, 1987.

que los campamentos mineros quedaban poco a poco abandonados y algunos de ellos se iban convirtiendo en pueblos fantasma, los ahora ex-mineros se fueron asentando en diferentes puntos del país. En relación al abandono de los campamentos, un artículo de prensa describe lo siguiente:

Frente a la frenética actividad de otros tiempos, los centros mineros se asemejan hoy a ciudades abandonadas; se percibe una falsa quietud, una espera de promesas que no se sabe en qué consistirán. Muchos de los comerciantes han cerrado sus puertas ante la pobre afluencia de clientes y los bares y restaurantes están silenciosos. A los cines, sin embargo, acuden aquellos que quieren hacer más corta su larga espera.

Ya no se ven las volquetas cargadas de trabajadores que regresan de las minas, y tampoco circulan los autobuses que hasta hace poco tiempo comunicaban Catavi con Llallagua y Siglo XX. Las mujeres parecen ser en este momento las más activas, reclamando el pan que cada dos días se distribuye en la más que desbarrotada pulperia (*Presencia* 9 de octubre de 1986).

En cuanto a los que partían para asentarse en otros lugares, los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, reflejaban dramáticamente el “peregrinaje” minero y la precariedad de sus nuevas “viviendas” –en realidad carpas o cartones– instaladas en los nuevos espacios que ocupaban, en los que no tenían acceso a servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y servicios educativos, entre otros.

Por otro lado, grupos de ex-mineros que partían a alguna localidad con promesas gubernamentales y buenas expectativas, pronto descubrían que éstas no se cumplían y que debían enfrentar situaciones inhumanas.

Tal fue el caso de un grupo de más de 300 familias, todas provenientes de las minas del sur de Potosí, el llamado “Complejo Central Sur”, que se dirigió a colonizar una región de clima cálido y poco poblada que se encuentra al norte del Departamento de La Paz. Partieron a Mapiri y Yucumo en ocho camiones contratados por el gobierno, siendo despedidos en la Plaza Murillo por el propio Presidente de la República, Paz Estenssoro. Sin embargo, muy poco después descubrieron que en la zona ni siquiera existía una posta sanitaria y menos aun infraestructura básica para que los migrantes iniciaran su trabajo como colonizadores. Denunciaron a la opinión pública el engaño del gobierno pero ya sus indemnizaciones, de entre 1.000 a 3.000 dólares americanos, se les había agotado.

Otro grupo de ex-mineros, compuesto por aproximadamente 70 familias, de acuerdo a un censo provisional realizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), se trasladó a la ciudad de Sucre y allí solicitaron ayuda

a las autoridades y a la población, pero pronto se dieron cuenta que las posibilidades de obtener trabajo eran mínimas para ellos.

Así, en los distintos lugares a los que se dirigieron los primeros relocalizados mineros no sólo tuvieron que enfrentar difíciles condiciones de vida y la falta de trabajo, sino la actitud mayoritariamente negativa de los pobladores de los lugares donde se asentaban.

Por ejemplo, en la ciudad de Tarija, el prefecto del departamento dijo a la prensa que la permanente llegada de trabajadores mineros, con sus respectivas familias, estaba causando una serie de problemas: “aumenta la desocupación, causa déficit habitacional y sobre todo, la falta de servicios básicos especialmente en los barrios periféricos” (Presencia 15 de octubre de 1986).

En lugares como Tupiza, Tarija, Cochabamba o Santa Cruz, los ex-mineros también fueron acusados de la aparición de aparentemente nuevos problemas sociales como robos, delincuencia juvenil y otros. Y, muchas veces, los potenciales empleadores se negaban a darles trabajo, pues consideraban al minero demasiado revoltoso e incluso peligroso por su larga experiencia sindical. Además, en ciudades como Tarija y Santa Cruz, también hubo fuertes manifestaciones racistas ante la llegada de los “collas”³.

Sólo algunas acciones de la Iglesia Católica y de organizaciones no gubernamentales (ONGs) logró paliar en algo la desesperante situación de los mineros despedidos, quienes organizaron ollas comunes, recolección de víveres y ropa e impulsaron el llamado “trabajo por alimentos” que, como fue el caso de la organización no gubernamental Fundación contra el Hambre, empleaba principalmente a esposas de los trabajadores en el empedrado y limpieza del calles.

Por su parte, en agosto de 1986, la Iglesia Católica emitió un largo documento llamando a la conciencia de los bolivianos frente a la situación de los relocalizados. En algunos de los párrafos de ese documento se dice:

La minería boliviana está marcada por signos dramáticos que interpelan la conciencia del mundo y el sentido cristiano de nuestro pueblo. Urge la búsqueda de soluciones solidarias y viables que condigan con la dignidad de la persona humana. Nos encontramos en una situación de verdadera emergencia nacional. (...) Presenciamos cada día el éxodo masivo y creciente de mineros y sus familias. Se van obligados por los bajos salarios, los retiros forzados, la política de relocalización,

³ En 1988, al realizar una consultoría para el Fondo Social de Emergencia (FSE) que fue creada con fondos provenientes principalmente del Banco Mundial y que tenía como objetivo crear trabajos eventuales para los ex-mineros, realicé numerosas entrevistas con relocalizados en Tarija, Tupiza y Santa Cruz, así como con autoridades locales que manifestaron su molestia por la presencia minera en sus ciudades.

retiros voluntarios, en muchos casos porque la mina ya no ofrece garantías de trabajo seguro y digno (Comisión Episcopal de Bolivia, Hoy 2 de agosto 1986).

En todo caso, los ex-mineros comenzaron a comprender que su sobrevivencia dependía fundamentalmente de ellos mismos y buscaron la forma de llevar el pan a sus familias. Pero la mayoría de las nuevas ocupaciones de los ex-mineros eran definitivamente de un nivel inferior al trabajo realizado como obreros especializados en distintas ocupaciones y categorías mineras. Ahora se desempeñaban como albañiles, obreros eventuales, cargadores en los mercados o, en el mejor de los casos, como taxistas. Gran número de ellos optaron por el comercio informal que en los siguientes años creció de manera desmesurada en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz⁴.

Por otro lado, los trabajadores que aun quedaban en las minas y que todavía constituían una mayoría a mediados de 1986, apelaron a su acumulación histórica y levantaron el discurso de “dar la pelea” para revertir el 21060, contando con que sus organismos sindicales locales y la FSTMB conducirían la lucha.

Por ejemplo, un dirigente sindical de la mina Huanuni señaló que su sindicato había decidido en asambleas no dejarse “chantajear” por el gobierno con las indemnizaciones prometidas, indicando:

Algunos trabajadores, por su desesperación y hambre, han optado por retirarse voluntariamente y se dieron cuenta muy tarde que fueron engañados (...). Nosotros defenderemos nuestras fuentes de trabajo porque estamos conscientes que esa es la única forma de mantener en vigencia no sólo de nuestros organismos sindicales, sino la estabilidad de nuestras familias y de la minería nacionalizada (*Presencia* 19 de julio de 1986).

El pasado del movimiento minero, de décadas de haber ocupado un lugar central en la vida nacional y en el que habían mantenido su larga tradición de actor con una sólida identidad positiva y proyección contestataria y combativa, parecía jugar sus últimas cartas.

Tras varios meses de conflictos aislados, movilizaciones en los campamentos mineros, concentraciones en Oruro y La Paz, búsqueda de alianzas con otros sectores populares, y ante el fracaso de todas esas medidas para hacer retroceder al gobierno, los mineros optaron por una acción desesperada tras una multitudinaria concentración realizada en Oruro, en agosto de 1986.

⁴ Instituciones como el CEDLA realizaron numerosos estudios sobre el crecimiento del sector informal en esos años, atribuido no sólo a los relocalizados mineros y de otros sectores productivos también impactados por el 21060 sino a la liberalización del mercado.

Además, un histórico Congreso de la FSTMB, realizado en Oruro en mayo de ese mismo año, había mostrado la división existente en el seno del movimiento minero, el deterioro de la legitimidad de los dirigentes, la significativa renuncia de Juan Lechín Oquendo que había conducido a esta organización sindical por más de 40 años, y había concluido con más preguntas que respuestas a la crítica situación de este sector, por lo que ahora fueron las bases mineras las que determinaron las acciones a seguir.

La Marcha por la Vida y la Paz, que se inició el 25 de agosto de ese año, fue planteada como una acción de “vida o muerte” pues los trabajadores mineros eran conscientes que se estaban jugando su sobrevivencia.

Ésta tuvo poco que ver con las viejas prácticas mineras, pues a pesar de estar acompañada de movilizaciones en los campamentos y de una huelga general indefinida, su carácter fue básicamente defensivo. Se trataba de realizar una marcha pacífica desde Oruro a la ciudad de La Paz en la que participaría el conjunto de los trabajadores que aun luchaban por permanecer en sus fuentes de trabajo.

Aunque en la partida desde la localidad orureña de Caracollo apenas había un número no mayor a 2.000 mineros, conforme la marcha avanzó sobre la carretera su número fue acrecentándose hasta llegar a los 10.000 trabajadores, incluyendo a decenas de amas de casa mineras cargadas de sus hijos y personas solidarias con su lucha. En todo su camino, por lo demás, el apoyo campesino fue generalizado y desprendido, lo que se manifestó a través de ollas comunes, alojamiento y apoyo moral. En las ciudades, principalmente en La Paz, la población sintió profundamente el drama minero y se solidarizó con ellos. También se manifestaron numerosas organizaciones populares y de clase media, partidos políticos de izquierda y organizaciones internacionales, pidiendo flexibilidad al gobierno movimientista.

Pero, al amanecer del 29 de agosto, cuando los mineros acampaban en la localidad de Calamarca y en la ciudad de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) preparaba su recibimiento y movilizaba a otros sectores sociales, la marcha fue cercada por el ejército.

Los marchistas amanecieron rodeados por un gran número de soldados fuertemente armados, mientras aviones de guerra sobrevolaban la zona. A pesar de que la mayoría de los trabajadores estaban decididos a enfrentarse al ejército, tal vez recordando las numerosas veces en que lo habían hecho en el pasado, los dirigentes de la FSTMB optaron por levantar la marcha y aceptar que el ejército desmovilizara a los obreros metiéndolos a la fuerza en camiones contratados previamente.

Aunque los trabajadores –muchos con lágrimas en los ojos– gritaron a viva voz “los mineros volveremos”, la derrota sufrida no era cualquier derrota. El movimiento minero

se desmoronaba y el otro actor social que había sido central no sólo para el movimiento popular sino para la historia política nacional, empezaba a desaparecer⁵.

Para la COB, el “desbande” minero significó la pérdida de su columna vertebral, es decir, del sector que por cuatro décadas había vanguardizado a esa organización matriz de los trabajadores, no sólo sindical sino políticamente, aglutinado en la casi mítica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que fue creada en 1944.

Sin duda, más allá de las apreciaciones sobre las causas y las condiciones históricas que llevaron al fracaso de las acciones desesperadas de los mineros después del 21060, a partir de agosto de 1986, se inició un largo periodo de transformaciones profundas para el otro poderoso movimiento minero y para la vida cotidiana tanto de los trabajadores del subsuelo que se aferraban a su pasado quedándose en los campamentos, como para los que intentaban construir un nuevo futuro.

Lo que en ese momento era difícil de prever o sólo muy pocos pudieron ver, es que la crisis y la diáspora minera, que sin duda significaba una ruptura con el pasado, sería un punto de partida en el proceso de traslado de la memoria y las acumulaciones históricas mineras a otros espacios que poco a poco ocuparon. Las connotaciones sociales y políticas de este proceso saldrían a luz décadas más tarde.

II. DE LA DERROTA SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO FUTURO

Después de la Marcha por la Vida y la Paz, la problemática minera se dividió más claramente en dos “frentes”. Por un lado, los trabajadores mineros que aun dependían de COMIBOL –que se constituyan en una absoluta minoría– soportarían el proceso de desestructuración de la Federación de Mineros, el desmoronamiento de su identidad positiva, descubrirían dolorosamente su debilidad y marginalidad, y estuvieron obligados a luchar por lo poco que quedaba.

Por el otro, los relocalizados o ex-mineros, se enfrentaban a la inapelable realidad de su salida de los campamentos mineros, lo que los obligaba a buscar una nueva vida, adaptarse a las nuevas condiciones y reconstruir el futuro.

⁵ Aquí retomamos la situación de los trabajadores que aun quedaban en las minas, tratado ampliamente en la segunda parte de nuestro estudio, en especial para el caso de Huanuni, con el objetivo de contextualizar la realidad que impulsó la segunda y definitiva ola de relocalizados.

Para los mineros que permanecían en los campamentos, el desafío seguía teniendo un sentido colectivo; para los relocalizados, era aparentemente un desafío fundamentalmente individual.

En cuanto a los primeros, en varias minas, como en la vanguardista Siglo XX (del norte de Potosí), en San José y Huanuni (del Departamento de Oruro), o en Colquiri y Caracoles (del Departamento de La Paz) se siguió insistiendo con huelgas de brazos caídos, huelgas de hambre, movilizaciones, mitines y propuestas de planes de reactivación al gobierno, para impedir su cierre.

Todas esas luchas aun no han sido recogidas por las ciencias sociales y la historiografía, posiblemente porque se enmarcaron en un contexto en el que el movimiento minero se desmoronaba sin “vuelta atrás”, y porque a pesar de que se utilizaron todos los métodos posibles, el resultado general fue siempre el fracaso. Finalmente, hacia fines de 1987, sólo permanecían abiertas las minas de Caracoles, Colquiri y Huanuni, aunque sin haberse iniciado aun su proceso de reactivación.

En relación a los segundos, los miles de trabajadores que ahora abandonaban en masa las minas, querían asegurarse las mayores ventajas posibles para su retiro. Pronto exigieron al gobierno el pago de sus indemnizaciones y una serie de “bonos extralegales”, llamados así pues estaban fuera de las leyes y reglamentaciones del Código Laboral vigente. Los organismos estatales terminaron aceptando esas exigencias, aun cuando significaban el crecimiento desmesurado de los costos económicos de su política minera, lo que muestra la inquebrantable decisión del gobierno de aplicar a ultranza el 21060 y los decretos sucesivos que reglamentaron el paulatino cierre de las empresas de COMIBOL.

Así, en septiembre de 1986, el gobierno accedió a pagar un bono extraordinario que significaba que por cada año trabajado el minero retirado recibiría la suma de Bs. 1.000, sobrepago que alcanzaba a todos los obreros que abandonaron las minas desde enero de 1986.

Como esta medida no alcanzaba a los primeros relocalizados, en su mayoría los trabajadores más antiguos, y como los mineros despedidos vieron la oportunidad de plantear exigencias cada vez mayores, numerosos conflictos estallaron en los siguientes meses.

Por ejemplo, en diciembre de 1986, más de 600 ex-trabajadores llegaron a la ciudad de La Paz e iniciaron una huelga de hambre que duró varios días.

A fines de octubre de 1987, nuevamente La Paz fue escenario de la llegada de cientos de relocalizados, acompañados de sus esposas e hijos, que instalaron carpas en el atrio de la Iglesia de San Francisco permaneciendo allí por 37 días. Esta vez, los

relocalizados que realizaron huelgas de hambre simultáneamente en varias capitales del país, exigieron el pleno cumplimiento de las promesas gubernamentales y la creación de nuevas fuentes de trabajo de carácter permanente.

Sin embargo, aunque obtuvieron solidaridad de diferentes sectores sociales, de la Iglesia Católica y de numerosas ONGs –conmovidos, por ejemplo, con la muerte de cuatro pequeñas niñas que no pudieron soportar las condiciones de su permanencia en La Paz– y consiguieron el compromiso del gobierno de mejorar su situación, las acciones de los relocalizados estaban lejos de parecerse a las protagonizadas en años anteriores por los mineros asalariados.

Así, el conjunto de la sociedad boliviana observó en esos días cómo los anteriormente “orgullos” mineros, que cuando llegaban a La Paz atemorizaban a la población haciendo tronar dinamitas y marchando con el puño izquierdo en alto, ahora no eran sino grupos de personas desesperadas que apelaban a medidas cuyo fin fundamental era provocar solidaridad y compasión del conjunto de los bolivianos y los poderes públicos.

Un telefax enviado por la FSMB a organismos internacionales, en el contexto de la primera llegada de relocalizados a La Paz, refleja esa nueva realidad, cuando dicen:

Denunciamos ante organizaciones sindicales mundiales y OIT que gobierno boliviano, después de consumar despido masivo de miles de trabajadores mineros de COMIBOL y paralizar actividades productivas de minería estatal, ahora se niega a atender reclamaciones sociales obreros mineros que exigen cumplimiento compromisos adquiridos para pago de beneficios sociales y otros (FSTMB 28 de diciembre de 1986).

Y un comunicado de la COB señala:

Lamentablemente, ha sido necesaria una huelga de hambre para lograr del gobierno la atención al problema de los compañeros relocalizados mineros, la misma que se extendió por varios días, en los que lejos de encontrar soluciones se apeló a la arrogancia, prepotencia, autoritarismo y soberbia que siguieron a la ligereza con la que los representantes del gobierno trajeron un problema de tanta significación para miles de trabajadores, a los que se debiera tributar agradecimiento, empezando por reconocer sus servicios en la construcción del país y su progreso (*Presencia* 4 de enero de 1987).

Un grupo de ex-mineros de la mina Matilde fue más lejos, enviando una carta al Presidente en la que le pedían que los ayude a salir del país en tono absolutamente dramático, como se puede advertir en los siguientes párrafos:

No teniendo dónde, ni cómo trabajar y ganarnos el sustento diario, hemos optado por abandonar el país, buscando perspectivas en el extranjero, donde estimamos consideran que aún somos útiles para el desarrollo y el progreso. (...) Su gobierno porta armas, dirige tropas y tanques como ocurrió en el cerco de muerte tendido a la “Marcha por la Vida”, mientras nosotros señor Presidente no logramos abrir las compuertas de la subsistencia, pese a que golpeamos con desesperación y angustia ocasionadas por el hambre y la miseria a que nos han sometido. (...) la falta total de perspectivas obliga a abandonar esta tierra que es nuestra y que en sus entrañas guarda nuestra sangre generosamente regada por su progreso y liberación (*Presencia* 22 de marzo de 1987).

Por su parte, en octubre de 1987, COMIBOL planteó que ya no aceptaría más presiones, pues consideraba que se habían pagado suficientes beneficios sociales, incluso por encima de la Ley General del Trabajo, numerando así las distintas obligaciones cumplidas hasta ese momento: indemnización por años de trabajo, desahucio consistente en tres sueldos cancelados con su total ganado por mes, bono extraordinario de acuerdo a la antigüedad del trabajador que oscila entre Bs. 1000 a Bs. 3.000, bono denominado de cesantía consistente en Bs. 80 mensuales por los meses de enero a diciembre durante el año 1987, bono de transporte a los ex-trabajadores consistente en Bs. 600 por una sola vez, condonación de la deuda de pulperia de Bs. 200 a todo personal en trabajo al 30 de octubre de 1986, atención médica por cuenta de COMIBOL en un periodo de 60 días después del retiro y por 10 meses a cargo de la Caja Nacional de Seguridad Social (C.N.S.S.) hasta diciembre de 1987, catastro pulmonar a realizarse por la C.N.S.S. para todo trabajador que requiera ese estudio y respaldo en los trámites de jubilación por la C.N.S.S. y los Fondos Complementarios (Corporación Minera de Bolivia –COMIBOL – 26 de octubre de 1987).

En ese mismo informe, la empresa estatal señaló que la crisis de la minería se debió a “las incoherencias técnico-administrativas de la minería nacionalizada impuestas por la dictadura anárquica sindical y su peligrosa politización ultrista” y acusó a la co-gestión obrera –practicada en la empresa estatal entre 1983 y 1985, durante el gobierno de la UDP– de “inversiones irracionales, irrentables y sobredimensionadas” (COMIBOL doc. cit).

Sin duda, las apreciaciones de los personeros de COMIBOL expresaban no sólo su voluntad de aplicar la nueva política minera, sino sentimientos de rechazo a lo que había significado el sindicalismo minero en el pasado, pues, como se sabe, la relocalización también tuvo como objetivo la liquidación del radical movimiento minero.

Al respecto, eran comunes declaraciones como la del ministro de Informaciones, Hermann Antelo, quien dijo a la prensa: “Los relocalizados tienen conocida filiación política y una ubicación estable; tienen fuentes de ingreso y, por lo tanto, no tienen mayor

prisa de encontrar solución al problema, sino de causar molestias políticas al gobierno” (*Presencia* 1 de noviembre de 1987).

A esas continuas acusaciones, la FSTMB respondió con el siguiente comunicado:

Han sido el gobierno y los empresarios mineros (estatal y privado), que en su afán de acumular riquezas a costa del hambre y la sobreexplotación de los obreros, han implantado la política de las relocalizaciones, con el propósito de desconocer los derechos de los trabajadores (FSTMB, *Presencia* 22 de noviembre de 1987).

En medio de acusaciones y contra-acusaciones, ese fin de año, numerosos periodistas consultados votaron por denominar al “relocalizado minero” como personaje del año: el drama de ese sector había tenido un primer plano. Mientras tanto, las minas continuaban vaciándose.

De acuerdo a fuentes de COMIBOL, después de un año de aplicación del 21060, de un total de 27.566 trabajadores que hasta agosto de 1985 habían pertenecido a esa empresa estatal, sólo quedaban 10.545. Para agosto de 1987, según un estudio de SEPAS, los despedidos alcanzaban a 24.078, de los cuales aproximadamente 2.650 correspondían a la minería privada y los demás a las minas estatales de Catavi, Quechisla, Colquiri, Huanuni, Unificada, San José, Caracoles, Viloco, Santa Fé, Bolívar, Colquechaca, Matilde, Kami, Bolsa Negra, Ferro Corp., Pulacayo, Río Yura, Metalurgia Oruro, Plantas de Volatilización de La Palca y Machacamarca, y a las Oficinas Central La Paz, Central Oruro, Agencia Cochabamba, Agencia Uyuni, Agencia Antofagasta y Agencia Mollendo. Según ese mismo informe, en las minas nacionalizadas sólo permanecían 5.173 trabajadores (Secretariado Nacional de Pastoral Social –SENPAS–, Comisión dependiente de la Conferencia Episcopal de Bolivia 19 de agosto de 1987).

Ante el aumento de la desocupación en Bolivia, pues con el 21060 no sólo se cerraron minas sino numerosas fábricas y empresas estatales concentradas en la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), a partir de 1988, el gobierno lanzó varias políticas para dotar de empleo a los ex-trabajadores, aunque sus alcances fueron muy limitados.

Por un lado, con apoyo financiero del Banco Mundial, del FMI y del PNUD, se organizó ese año el Fondo Social de Emergencia (FSE), posteriormente denominado Fondo de Inversión Social (FIS), cuya principal finalidad fue la de generar empleo temporal en obras que debían ser solicitadas por diferentes localidades rurales y ciudades del país a través de los municipios, las prefecturas o “ejecutores”, como empresas constructoras y ONGs.

Cientos de mineros dispersos por el país fueron empleados en construcción de caminos, empedrado de calles, limpieza de canales y otras tareas de servicio, siendo los más beneficiados los que accedieron a proyectos de “autoconstrucción” de viviendas en los lugares donde se habían asentado, como fue el caso de Tarija.

Por otro lado, el Ministerio de Minería propuso dar concesiones en alquiler, en minas desahuciadas por COMIBOL, a cooperativistas mineros que estuviesen dispuestos a explotar por cuenta y riesgo propio vetas de muy baja ley y parajes abandonados. Numerosas cooperativas se formaron con ex-trabajadores en lugares como Catavi, Siglo XX, Colavi, Colquechaca, Japo, Morococala, Caracoles y Huanuni, alcanzando un número elevado de socios en muy poco tiempo.

Pero los cooperativistas se enfrentaron a graves problemas como pésimas condiciones de trabajo, ausencia total de seguridad industrial, falta de ventilación, permanentes accidentes de trabajo, eliminación de beneficios sociales, bajos precios para el mineral rescatado y otros. En lugares como Huanuni, que permaneció abierta por sus importantes recursos estañíferos, los cooperativistas provocaron numerosos conflictos con los obreros “regulares” por parajes, contribuyendo a la división del sector minero y a la confrontación violenta entre “hermanos de clase”.

También, algunas instituciones como la Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ), lanzó planes de asentamientos humanos para ex-mineros. En este caso, se impulsó el traslado de éstos a zonas alejadas del norte del Departamento de La Paz –el llamado “Alto Beni”–, que aunque carecían de infraestructura caminera y de servicios eran ricas en fauna y flora, contaban con reservas auríferas y lugares como San Buenaventura, Ixiamas y Apolo eran considerados potenciales “polos de desarrollo” para el departamento, sobre todo para la producción azucarera.

Sin embargo, aunque muchas familias mineras partieron a esas zonas con bastante esperanza, luego de descubrir las dificultades que debían enfrentar, descendieron hacia lugares más poblados, como es el caso de la región de Caranavi, donde colonizaron tierras, provocando también conflictos con los campesinos del lugar. Otro grupo se asentó en “La Asunta”, en sud Yungas, región del mismo departamento, donde comenzaron a producir coca, siendo actualmente una de las zonas catalogadas como productora de “coca excedentaria”, es decir, de producción “ilegal”.

Ahora bien, poco a poco, las formas y los contenidos con que los trabajadores enfrentaron sus nuevas condiciones de vida, los cambios en relación a su actividad productiva anterior y su asentamiento cada vez más definitivo en regiones diversas

del territorio nacional, mostró que sus acumulaciones históricas previas y su memoria colectiva comenzaban a intervenir⁶.

Por un lado, si bien en los primeros grupos de relocalizados se puede advertir un mayor desbande del sentido colectivo que había sido parte fundamental de la identidad minera, muy pronto reemergieron sentimientos de pertenencia, comportamientos solidarios y búsqueda de proyecciones comunes ante la nueva realidad.

En un principio, esto se expresó en las movilizaciones descritas más arriba, que fueron organizadas por la Comisión Nacional de Relocalizados y las comisiones departamentales recientemente creadas, pero cuando los problemas iniciales comenzaron a solucionarse, la reconstrucción de prácticas e imaginarios del pasado se expresaron en los nuevos lugares de asentamiento.

Al respecto, en muchos casos, los ex-obreros de determinada mina o grupo de minas cercanas, se trasladaron a algún lugar conjuntamente y se instalaron en barrios urbanos o localidades rurales también como grupo compacto, estableciendo allí muy pronto sus nuevas organizaciones. Ahora, éstas tenían como funciones principales las de organizar y tramitar la compra de terrenos, el establecimiento de servicios básicos, la construcción de escuelas para sus hijos, e incluso –como había sido en las minas– la organización de actividades culturales y deportivas.

Por ejemplo, el secretario general de los relocalizados en la ciudad de Sucre, Jorge Velasco, contó a la prensa:

Lo importante es que ya estamos organizados en un sindicato por la afluencia asombrosa que sobrepasó todos los límites que nos imaginamos, se tenía en mente que simplemente llegarían a 200 familias, pero hasta el momento ya se tienen 262 familias inscritas (*Unión* 12 de febrero de 1987).

En el caso de la ciudad de Cochabamba, éste fue uno de los lugares de mayor migración minera, principalmente de las minas del norte de Potosí, lo que se debió en gran parte a que los trabajadores habían adquirido en años anteriores terrenos para trasladarse allí cuando tengan que jubilarse, con lo que continuaron con una vieja tradición iniciada en 1952, cuando miles de trabajadores mineros que cambiaron de razón social por la nacionalización de las minas recibieron terrenos en esa ciudad a cambio de sus indemnizaciones.

⁶ En el caso de los mineros que permanecieron en sus fuentes de trabajo, Huanuni se convirtió en una suerte de “lugar de la memoria”, aspecto que trabajamos en otro punto de esta tesis como un elemento central de la misma.

Ya desde 1987, la Asociación Regional de Mineros Relocalizados de Cochabamba, organizaba frenéticamente la búsqueda de mejores condiciones de vida para los aproximadamente 4.000 ex-mineros afiliados a ella, que junto a sus familias sumaban unas 20 a 30.000 personas.

Muy pronto se construyeron en Cochabamba “barrios mineros” que no sólo fueron bautizados con nombres de antiguos campamentos como “Siglo XX”, nombraron calles en conmemoración de ex-dirigentes “mártires” del sindicalismo minero, como “Federico Escobar”, sino que los levantaron con características muy similares a las de los campamentos de donde provenían⁷.

Ahora bien, más allá de los aspectos más visibles del traslado del “mundo minero” y la “cultura minera” a los nuevos lugares de asentamiento, es fundamental analizar cómo se produjo la recreación y/o adaptación de su memoria histórica no sólo en sus aspectos organizativos sino incluso ideológicos y políticos.

En todo caso, estos “sentidos subyacentes” no serán visibles inmediatamente, sino varios años después, cuando las nuevas luchas sociales, conducidas muchas veces por nuevos actores sociales, expresen de una u otra forma la “sobrevivencia” y/o “reemergencia” de las viejas prácticas políticas y sindicales mineras. El Trópico cochabambino y la ciudad de El Alto lo mostrarán más nítidamente.

III. ASENTAMIENTOS MINEROS EN EL CHAPARE COCHABAMBINO Y EN EL ALTO DE LA PAZ: EL TRASLADO DE LA MEMORIA Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD

En este punto, nuestro interés fundamental es indagar sobre cómo actuó la memoria histórica y colectiva “minera” en estos dos espacios que se caracterizan por ser receptores de amplias migraciones, por su complejidad social y etno-cultural, y que se han situado en el primer plano de las luchas sociales en las últimas dos décadas, aunque en el caso de El Alto de manera mucho más reciente.

Entre 1986 y 1990, estos dos lugares fueron poco a poco privilegiados para el traslado de centenares de ex-trabajadores mineros con el objetivo de su asentamiento más definitivo.

⁷ En 2004 visité la mayoría de barrios mineros en Cochabamba. Entrevisté a algunos jóvenes que me contaron que ellos no conocían los campamentos mineros pues se habían trasladado de muy niñ@s a las minas pero que pensaban que los barrios en los que ahora vivían se parecían mucho a éstos. Evidentemente cualquiera que conoció un campamento minero reconocería inmediatamente esta similitud.

En el caso del Trópico o Chapare cochabambino, ya existía allí una antigua tradición de migración de ex-mineros a localidades como Villa Tunari, como ocurrió en las décadas de los 60 y 70. Por otro lado, de acuerdo al ex-dirigente y actual Presidente de Bolivia, Evo Morales, las relaciones entre organizaciones campesinas del Chapare con los sindicatos de Catavi-Siglo XX eran fluidas a fines de la década de los 60 y principios de la de los 80, las que tenían tanto carácter deportivo (campeonatos de fútbol), como sindical⁸.

En relación a la década de los 80, aparentemente los primeros ex-mineros e hijos de mineros llegaron a la zona desde que se produjo la primera ola de relocalizados de 1985-1986, como trabajadores temporales, o más propiamente, como “pisa coca”, es decir, como parte de los miles de bolivianos que se trasladaban a la zona para realizar trabajos eventuales vinculados con la elaboración clandestina de la droga, que para entonces se había elevado significativamente.

Un comunicado de la Iglesia Católica, de agosto de ese año, ilustra de alguna manera esa situación, cuando señala:

La crisis ha expuesto a los mineros al contrabando y las actividades vinculadas al narcotráfico” (...). Los efectos del narcotráfico, en especial sobre la juventud minera que se ve involucrada en este proceso, se hace cada día más devastadora en el orden material como sobre todo, moral (*Hoy* 2 de agosto de 1986).

Sin embargo, las migraciones más organizadas de relocalizados al Chapare comenzaron recién en 1987. Los grupos de ex-mineros y sus familias se ubicaron desde entonces mayoritariamente en el Parque Nacional Isiboro Sécure, donde aun existían tierras que repartir, ya que otras partes del Trópico Cochabambino estaban copadas por migraciones anteriores, principalmente provenientes del Valle Alto y el Valle Bajo cochabambino, pero también de otros lugares del país, como de las zonas rurales de Potosí, Oruro y del Altiplano paceño.

Al respecto, es importante explicar que los sindicatos campesinos eran los encargados de la distribución de tierras en la zona, cuya producción principal para el mercado era la coca (legal e ilegal), aunque para el consumo familiar y mercados locales también se producía arroz, yuca, cítricos y plátanos. Posteriormente, algunos de esos productos tradicionales, como el plátano, y otros nuevos, como el palmito, se constituyeron en parte de la llamada “sustitución de cultivos” o “erradicación voluntaria”, impulsada por organismos internacionales y el gobierno de los Estados Unidos.

⁸ La entrevista se realizó en enero de 2004 en el Chapare.

Aunque no existen datos estadísticos exactos, por entrevistas realizadas en la zona y algunas fuentes escritas consultadas, se puede señalar que el número aproximado de los mineros que se trasladaron al Chapare, alcanzaría a aproximadamente 2.000 ex-mineros, sin contar sus familias. Esto significa un porcentaje menor, ya que según el censo de 1992, de más de 120.000 habitantes del Trópico cochabambino, el 56 por ciento de la población era originaria de la zona, el 28,8 por ciento provenía del mismo Departamento de Cochabamba, un 5,7 por ciento correspondía a los departamentos de Potosí y Oruro (que incluye a campesinos y ex-mineros) y el resto provenía de diferentes regiones de Bolivia.

Sin embargo, a pesar de ello, como ocurrió en el pasado, cuando numéricamente hablando los mineros no alcanzaban a más del 5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), su influencia no se derivaría de su número sino de aspectos más cualitativos.

Antes de dar algunos elementos sobre esto último, es importante señalar que los mineros que se trasladaron al trópico cochabambino, vivieron la metamorfosis de su condición social de “minero a campesino” o más propiamente de “minero a cocalero”, lo que aparentemente podría tener fuertes connotaciones en la desestructuración de su antigua identidad.

Por otro lado, los mineros arribaron al Chapare cuando ya esta región del país había sido identificada como una zona “especial” y conflictiva, al ser la principal productora de coca considerada excedentaria, y el gobierno había comenzado a aplicar medidas radicales para su erradicación, tanto forzosa como concertada.

En ese camino, fue central la aprobación de la conocida “Ley 1008”, que tenía entre sus atribuciones el de poder encarcelar a cualquier sospechoso de contribuir directa o indirectamente a la producción de cocaína, y mantenerlo detenido mientras no se pruebe lo contrario. Además, se crearon organismos represivos especializados y “de élite”, como UMOPAR, que comenzó a cometer numerosos abusos contra los cocaleros, y se inició la actuación de la DEA norteamericana en toda la región con similares características.

Por otro lado, para 1988, las organizaciones campesinas de la zona se habían fortalecido bajo la conducción de un joven dirigente de origen orureño, Evo Morales, que inició sus actividades sindicales en una central campesina y luego fue elegido secretario ejecutivo de la Federación Especial del Trópico de Cochabamba.

Ya ese año de 1988, se produjo la primera “masacre” de campesinos cocaleros, protagonizada por un grupo de “umopares” que dispararon a quemarropa contra la población que realizaba una manifestación pacífica en repudio de las acciones represivas y los abusos a los que cotidianamente estaban sometidos.

Por otro lado, desde principios de la década de los 90, el movimiento cocalero se fortaleció con la organización de cinco –posteriormente se organizó una más– federaciones campesinas que abarcaban todo el territorio del trópico cochabambino y que se aglutinaron bajo el paraguas de la Federación Especial Campesina. Bajo su conducción, las luchas se intensificaron por la “defensa de la coca” y en contra de las políticas de “erradicación”.

Ahora bien, los ex-mineros que se instalaron en el Isiboro Sécore, como era de esperar, sembraron cocales en sus tierras, ingresando así a la problemática general del Trópico Cochabambino.

Aunque es difícil saber el grado de participación que tuvieron en las primeras movilizaciones que han sido inscritas en la historia y memoria de los cocaleros, como la llamada “masacre” de Villa Tunari de 1988⁹, su influencia comenzó a sentirse de diversas formas.

Por ejemplo, en todo el proceso de fortalecimiento sindical que se intensificó desde 1988, un conocido ex-dirigente minero y miembro de la “vieja guardia” de la FSTMB, Filemón Escobar, se situó como “asesor” de Morales y se convirtió en un principal orientador ideológico de las bases cocaleras. El propio Escobar nos contó que su tarea fundamental en esos primeros años en el Chapare, fue la de realizar decenas de seminarios de “formación sindical” al conjunto de los cocaleros, así como de “formación política”, tareas que lo llevaron a recorrer todos los rincones del Chapare¹⁰.

Desde entonces, pasando por marchas a las ciudades de Cochabamba y de La Paz, bloqueos carreteros, huelgas de hambre, mítimes y la creación del Movimiento al Socialismo (MAS), partido o “instrumento político” impulsado por los cocaleros a mediados de la década de los noventa, Escobar continuó como “brazo derecho” del líder cocalero, siendo para muchos uno de los principales ideólogos del movimiento¹¹.

Ahora bien, la influencia de Escobar sobre Morales no era totalmente nueva, ya que, como dijimos, la relación del sindicato de Villa Tunari con los sindicatos de Siglo XX y Catavi provenía de fines de la década de los 70. Sin embargo, ahora se añadía la presencia de decenas de ex-mineros en el lugar.

Una cooperante e investigadora danesa, que realizó entrevistas a cocaleros a mediados de la década de los 90, señala que éstos reconocían ampliamente la transmisión

⁹ En esa oportunidad, UMOPAR atacó a los campesinos cocaleros con armas de guerra, cuando éstos realizaban una manifestación en contra de los abusos que se cometían cotidianamente en la zona a nombre de la erradicación de cocales.

¹⁰ Entrevista realizada a Filemón Escobar en enero de 2004.

¹¹ Sin embargo, en 2004 ambos dirigentes del MAS se distanciaron y actualmente su alejamiento es más profundo.

de la experiencia sindical minera a la zona cocalera, y que los relocalizados se destacaban en las movilizaciones y luchas del sector. Así, su trabajo recoge este testimonio:

En la lucha son muy consecuentes los compañeros mineros, nunca ellos dicen que así nomás, sino: vamos con mano armada o que? porque ellos... tantos enfrentamientos que hicieron en la mina, entonces ellos ya son precavidos de todo (Ejdesgaard 1997).

Por su parte, la dirigente cocalera Leonilda Zurita, que nació en la zona, nos contó que la presencia de los mineros se sintió inmediatamente en el Chapare, así como la de las mujeres o “amas de casa mineras”, las que impulsaron desde un principio la organización de las mujeres cocaleras con las mismas características que ellas lo hicieron en las minas. Leonilda dijo al respecto:

Gracias a ellas nos hemos organizado las mujeres... Ellas nos han enseñado a que nos organicemos porque las mineras habían sido bien organizadas, porque las primeras centrales de organizaciones de mujeres han existido [en el Chapare] a la cabeza de las compañeras palliris¹².

Tampoco existen datos exactos sobre la participación de los ex-mineros o sus hijos en las direcciones sindicales, pero está claro que muchos han ocupado puestos importantes, como es el caso de Feliciano Mamani, una de las cabezas más conocidas del movimiento cocalero, quien nos dijo:

Entonces los relocalizados, los mineros también estamos asentados. Yo también soy parte de eso. Mis familias trabajaban en la mina de Siglo XX y Uncía (...). Es la experiencia..., pues los mineros estamos orientados desde más antes¹³.

Así, de manera subyacente, casi “clandestina”, los ex-mineros que vivieron un proceso de “campesinización” a “cocalización” utilizaban su memoria, no sólo para sí mismos sino que la trasladaron al grupo con el que convivían y se interrelacionaban.

Pero la memoria minera no se “congeló” en el pasado sino que se recreó y enriqueció con elementos ideológico-culturales nuevos, no sólo en relación al actor campesino-cocalero, sino en relación a esa su nueva condición de ex-minero-cocalero. Así, las articulaciones ideológicas y culturales entre ambos grupos se tornarían “explosivas” en muy poco tiempo, proceso que fue empujado en gran medida por la realidad de confrontación permanente de los cocaleros con los organismos represivos (del Estado y

¹² Entrevista realizada en enero de 2004 en el Trópico cochabambino.

¹³ Entrevista realizada en enero de 2004 en el Trópico cochabambino.

la DEA), las políticas gubernamentales y la injerencia norteamericana. Al respecto, Anne Marie Ejdesgaard señala:

Es evidente que para los cocaleros, la imagen de los mineros y la memoria sobre el destino de ellos es un símbolo fuerte que tiene sentido para explicar su situación actual y su forma de actuar frente al gobierno/Estado” (...). Hay una simbología clara en la comparación. Se trata de: 1) el nivel de vida (...), 2) la situación del trabajador/campesino frente a las autoridades externas (la empresa, los militares: persecución, matanza) (Edjesgaard 1997).

Y cita la entrevista realizada a Estanislao Chile, quien señala:

Su ley, por ejemplo la 1008, con el 21060 son parejadas las leyes, ¿no? Porque 21060 igualito ha tratado de vaciar a las minas a la gente, y ahora 1008 igualito aquí da vuelta y quiere sacarnos de aquí.

Concluye que los cocaleros y mineros tienen en común la represión por parte del gobierno/Estado y la respuesta organizativa en contra de esa represión, “es decir, una resistencia conciente y organizada”.

Coincidiendo en gran medida con esas apreciaciones, nosotros creemos que en el Chapare ha nacido una nueva “identidad social”, que se alimenta tanto del pasado del movimiento minero como de las experiencias acumuladas por el movimiento cocalero. En otras palabras, se ha producido una suerte de “proletarización” de los cocaleros, sobre todo en los aspectos sindicales y organizativos, y una “cocalización” de los mineros, pues éstos no han dejado de asumir su nueva condición social. En el fondo, además, ambas corrientes tienen en común un elemento fundamental: el de la lucha desigual contra un poderoso adversario, al que, sin embargo, han desafiado constantemente.

Ahora bien, en relación a la llegada de relocalizados mineros a la ciudad de El Alto, aunque existen algunas características similares con lo ocurrido en el Chapare, esta migración tiene sus propias especificidades.

Un aspecto fundamental tiene que ver con el hecho de que los ex-mineros provenían de campamentos o poblaciones rurales más o menos grandes y más modernas que los pueblos campesinos, pero que en gran medida eran lugares aislados, con condiciones de vida muy limitadas y de donde los mineros salían en muy pocas ocasiones. Ahora llegaban a una ciudad, que para la década de los 80 tenía más de 500.000 habitantes y que, además, se encontraba pegada a otra gran ciudad, La Paz, con unos 800.000 habitantes para el mismo periodo. Eso significó que su traslado transformó su condición social de minero

urbano-rural a poblador urbano de una gran ciudad, aunque marcada por sus altos niveles de pobreza.

Por otro lado, un gran porcentaje de los mineros pueden ser considerados “culturalmente” hablando como mestizos y, en muchas partes del país, son de origen quechua hablante. En la ciudad de El Alto, como se sabe, la mayoría de los migrantes son de origen aymara y los rasgos culturales indígenas son más fuertes.

Finalmente, en El Alto, los ex-proletarios no se asimilaron colectivamente en otro actor social, como fue el caso del Chapare, sino que tuvieron que asumir y realizar todo tipo de tareas y de forma individual. Como dijimos más arriba –para el caso de mineros trasladados a ciudades capitales del país– los relocalizados en El Alto se convirtieron en obreros eventuales, albañiles, taxistas, pequeños comerciantes, empleados de baja categoría en oficinas, artesanos, soldadores, etc. Muchos de ellos, por otra parte, “bajaban” diariamente a la ciudad de La Paz en busca de trabajo.

La primera ola de relocalizados que llegó a El Alto se produjo entre 1986-1987. Al respecto, lastimosamente no cuento con datos exactos sobre la cantidad de mineros que desde 1986 se asentaron en esa ciudad, aunque he obtenido información dispersa que señala un número aproximado de 6.000 ex-trabajadores, sin contar a sus familias.

Lo cierto es que cientos de ellos se instalaron en terrenos abandonados y que aún no habían sido urbanizados, donde comenzaron a vivir en carpas de nylon, teniendo que soportar las duras inclemencias del tiempo y la ausencia de todo tipo de servicios básicos durante varios meses. Un reportaje periodístico relata el respecto:

La metamorfosis que muestran las fotografías, se está operando a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el desgarrador problema del trabajador minero obligó a éste, después de recorrer errantes muchos lugares del territorio en busca de un lugar seguro para su familia, a asentarse en el altiplano paceño, próximo a la ciudad de El Alto y araÑar la tierra para levantar el techo del que fueron privados intempestivamente en las minas (*Presencia* 20 de junio de 1987).

Sin embargo, esta difícil situación no impidió que se organizaran colectivamente para enfrentar de manera conjunta tanto su sobrevivencia como su asentamiento en esta joven ciudad de Bolivia. En todo ello, fue muy importante el papel cumplido por las esposas de los trabajadores, que impulsaron diverso tipo de actividades para enfrentar colectivamente las dificultades del momento.

Por ejemplo, las mujeres mineras organizaron “ollas comunes” en las que quienes habían podido conseguir algunos recursos económicos contribuían con los víveres necesarios y el conjunto de las amas de casa organizadas cocinaban.

La dirigente del Comité Departamental de Amas de Casa Despedidas, Deysi Incapoma, comentó sobre esto a la prensa:

Esta cocina familiar de las ollas comunes autogestionarias, es la revelación del nivel de conciencia y organización de los diferentes comités de amas de casa de trabajadores mineros desocupados, que son parte de sus actividades en defensa de sus legítimos derechos para la atención colectiva de sus necesidades alimentarias (*Presencia* 22 de junio de 1987).

Por otro lado, la capacidad organizativa y de movilización de grupos de familias mineras contribuyó de manera decisiva a que tras numerosas luchas y negociaciones con la Alcaldía de La Paz, primero, y la de El Alto, después, logren construir “barrios mineros” en diferentes espacios de esa ciudad, siendo los más significativos los siguientes: “Santiago I”, “21 de Diciembre”, “Santiago II” y “Rosas Pampa”, aunque también algunos relocalizados se instalaron en barrios ya constituidos, como “Alto Lima” y “Ciudad Satélite”.

De manera colectiva, como a través de programas de “autoconstrucción” en los que utilizaron viejas formas de cooperación andina como el *ayni* (sistema de reciprocidad que puede entenderse como cercano al occidental “hoy por ti, mañana por mí”), consiguieron convertir los terrenos comprados a la Alcaldía en urbanizaciones dotadas de viviendas aceptables, servicios básicos, plazas y espacios de recreación.

Es llamativo, nuevamente, que la organización espacial de las calles y casas en esos barrios tiene un parecido importante con los campamentos mineros así como, en algunos casos, como en Santiago II, la instalación de un monumento en homenaje al trabajador minero (idéntico al que existe en Siglo XX), así como estatuas edificadas en homenaje a líderes mineros, como Juan Lechín, traen rápidamente a la memoria los viejos campamentos mineros.

Organizativamente, los mineros trasladaron sus formas sindicales a las llamadas “Juntas de Vecinos”, aunque aun hay que investigar mejor sobre algunos cambios y/o adaptaciones que se produjeron en este caso.

Por otro lado, las “amas de casa” mineras se organizaron rápidamente en “clubes de madres” que contaron con el apoyo de numerosas ONGs (especialmente las dedicadas

a apoyar a mujeres de bajos recursos) e instituciones religiosas para ser capacitadas en distintos tipos de labores que les permitieron contribuir al ingreso familiar.

Ahora bien, aunque existen varios estudios no publicados, sobre todo realizados por las numerosas ONGs instaladas en El Alto y por CEPROMIN –una institución vinculada directamente con el sector minero– que describieron las condiciones de vida de los relocalizados y sus familias en El Alto, las ocupaciones que realizaban, la manera en que se organizaron en sus barrios en función de determinadas demandas sociales, las formas de cooperación que existen y distintas formas de solidaridad entre las familias mineras, aun no se ha indagado lo suficiente ni sobre los cambios ocurridos en la identidad minera, ni en la manera en que ha actuado la memoria de su pasado proletario en su nueva realidad social emergida de su traslado a El Alto.

A pesar de ello, el seguimiento que realicé de los acontecimientos de octubre de 2003 ocurridos en El Alto, me ha permitido abrir algunas pistas que propongo de manera sintética en el último punto de este artículo. En todo caso, en él, trataré también sobre la presencia en El Alto de los mineros de Huanuni y cooperativistas mineros, que jugaron un papel importante en el triunfo popular contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

IV. HUANUNI COMO “LUGAR DE LA MEMORIA”

Para entender mejor el papel jugado por los trabajadores “regulares” y los cooperativistas mineros provenientes de Huanuni en la “guerra del gas” de octubre de 2003, será importante retomar al sector de trabajadores mineros que después de la “relocalización” permaneció en los campamentos. En ese sentido, el caso más significativo es la mina de Huanuni, ya que esta es la única que sigue abierta hasta nuestros días, habiendo permanecido varios años bajo la administración de COMIBOL, pasando por su privatización y que en los últimos años pasó a ser nuevamente administrada por la empresa estatal.

Así, como dijimos en el primer punto, desde mediados de la década de los noventa, sólo Caracoles, Colquiri y Huanuni seguían en funcionamiento. Esta última, considerada una de las minas de estaño más ricas del mundo, con importantes reservas de mineral y que había proporcionado buenas ganancias en el pasado, fue escogida para mantenerse abierta, tras una evaluación que la consideró viable.

Sin embargo, en los siguientes años, Huanuni vivió profundas y traumáticas transformaciones, tanto en el aspecto económico-productivo, como en el social, y, sobre todo en el de la organización sindical.

En relación a los aspectos productivos, la mina de Huanuni atrajo a cientos de expulsados de otras minas, algunos de los cuales organizaron dos nuevas cooperativas que se sumaron a las dos ya existentes. Otros, engrosaron las filas de los “jukus” o “ladrones de mineral”, actividad tradicional en la zona que desde principios de los 90 alcanzó mayores proporciones. Y, sólo un pequeño número, que varió entre 500 a 800 trabajadores, permaneció como fuerza de trabajo de la vieja Empresa Minera de Huanuni, creada en 1952 después de la nacionalización de las minas.

Después de la aplicación del D.S. 21060, las características de la actividad minera en Huanuni cambiaron radicalmente, ya que la producción dependiente de la empresa estatal pasó a ser marginal en relación a las otras dos formas de explotación, lo que en gran parte se debió a la falta de interés de COMIBOL por implementar rápidamente la rehabilitación de la mina. Huanuni permaneció abierta durante varios años en condiciones deplorables, como ausencia de implementos indispensables para el trabajo de interior mina, falta de medidas de seguridad, inundación de parajes, no renovación de maquinaria gastada, etc.

En cuanto a los aspectos sociales, derechos y conquistas obtenidos por los trabajadores mineros en luchas pasadas, como educación gratuita para sus hijos, y de buena calidad, atención a la salud de la familia minera, seguridad social y pulpería barata, fueron eliminados paulatinamente y pese a varios conflictos desarrollados por los trabajadores para impedirlo.

Paralelamente, los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la presencia en la localidad de un gran número de desocupados, provocaron el incremento de la criminalidad, así como del alcoholismo, principalmente entre los jóvenes. Además, se produjeron numerosos enfrentamientos entre cooperativistas y jukus, normalmente aliados entre sí, contra los obreros de la empresa, en disputas por áreas de trabajo.

Pero el aspecto más sentido por los mineros de Huanuni, fue el debilitamiento de su organización sindical, arrastrada por la profunda crisis de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de la Central Obrera Boliviana (COB) y de sus propias transformaciones internas.

Además de haberse debilitado por los constantes enfrentamientos con los cooperativistas y los jukus, el sindicalismo de Huanuni vio fuertemente disminuidas sus posibilidades de presión y de conseguir resultados con sus acciones, ya que numerosas huelgas y movilizaciones impulsadas desde los últimos años de la década de los 80 no consiguieron cambiar las políticas gubernamentales en torno a la minería orientadas por el 21060.

Por otro lado, en Huanuni, la empresa implementó una rígida disciplina laboral, que recordaba los tiempos de los “barones del estaño” (Huanuni perteneció al más importante industrial minero, Simón Patiño, desde 1912) a través de nuevos reglamentos en los que se establecían numerosas prohibiciones para el desenvolvimiento de la actividad sindical, así como de la vida social entre los trabajadores.

Como medidas disciplinarias se implementaron las tarjetas de identificación personal para el ingreso y salida de la mina, la prohibición de ingreso a todas las instalaciones de la empresa de personas no autorizadas, la “requisa” diaria de los trabajadores para evitar robos, la prohibición de abandono del personal de sus lugares de trabajo para la tradicional “sajra hora”, la práctica eliminación de la distintas modalidades de ch’allas en el interior de la mina y el culto al “tío de la mina”, así como otras medidas que claramente afectaban viejas e importantes tradiciones del mundo minero.

En relación al funcionamiento del sindicato y el desarrollo de conflictos, el nuevo reglamento penalizó la protesta social y estableció que las huelgas y los paros de labores que se realizasen sin haber seguido todo los pasos “legales” previos, acarrearían sanciones inmediatas para los trabajadores, como el despido, el no pago de haberes por los días no trabajados, descuentos y otro tipo de sanciones. Además, se advirtió que no debía existir “ingerencia política” en la actividad sindical.

A pesar de estas y otras situaciones que impactaron negativamente en la vida de los trabajadores y sus familias, los mineros de Huanuni lograron enfrentar de una u otra manera los nuevos desafíos. La acumulación histórica previa, de experiencias asumidas como parte de la conciencia de clase, expresadas y recreadas en la memoria colectiva, actuaron como catalizadores de la resistencia a ser totalmente derrotados, primero, y en la recuperación paulatina de su carácter de actor social capaz de proyectarse nuevamente en la vida nacional, después.

Por entrevistas realizadas en la mina, pudimos advertir que los trabajadores que permanecieron en Huanuni, sintieron que en ellos reposaba la posibilidad de sobrevivencia del proletariado minero tradicional. Así, a pesar de que Huanuni había sido uno de los pilares fundamentales de la FSTMB, nunca como ahora tenía la responsabilidad de evitar la muerte final del movimiento minero boliviano, lo que indujo al deseo de recuperar de alguna manera ese pasado, empezando por mantener vigente su sindicato.

Por otro lado, los obreros de Huanuni se mantuvieron firmes en su decisión de luchar para evitar el cierre de la empresa. Así, a lo largo de la década de los 90, el sindicato de Huanuni desarrolló numerosos conflictos en torno a demandas como mejores condiciones de trabajo, frenar mayores despidos de obreros, defensa de las conquistas sociales y laborales, vigencia de sus organizaciones y rehabilitación de la empresa, entre otros.

Este último fue uno de los motivos permanentes de presión al gobierno, la que fue realizada a través de paros y huelgas –una de ellas, en 1988, duró 70 días–, movilizaciones a Oruro y La Paz, huelga de hambre de las amas de casa y otros. En ese momento, para los mineros de Huanuni era fundamental que la empresa se recupere pues con ello aseguraban su fuente de trabajo. Sin embargo, cuando el gobierno decidió hacer mejoras en el interior de la mina y en el ingenio, lo hizo con el objetivo de preparar la mina para su inmediata privatización.

Esa posibilidad motivó una gran resistencia de los obreros de Huanuni, mientras que, paralelamente, varias licitaciones lanzadas por el gobierno no tuvieron el éxito esperado, hasta que, en el marco de las políticas de “capitalización” implementadas por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y continuadas por el de Hugo Banzer, la mina fue adjudicada a la empresa inglesa Allied Deals, en 1999.

Los mineros aceptaron finalmente la privatización de Huanuni ante las promesas de jugosas inversiones y la inamovilidad de los trabajadores. Ni una ni otra cosa se cumplieron, además que pronto quedó en evidencia que la más rica mina de estaño de Bolivia había caído en manos de una empresa deficitaria y con problemas de deudas en su propio país. Las movilizaciones obreras obligaron finalmente a que la empresa inglesa abandonase Huanuni y que la mina retorne a depender de COMIBOL, lo que el gobierno aceptó a pesar de que el nuevo Código Minero prohibía la administración directa de ninguna mina y decidió la intervención de la mina bajo administración de los propios trabajadores. De esa manera, los obreros de Huanuni se impusieron a las rígidas leyes que desde 1985 transformaron la realidad minera en Bolivia.

El triunfo obtenido los impulsó a realizar enormes esfuerzos para mejorar la producción de la mina y fortalecer sus organizaciones sindicales.

En 2001, incluso se movilizaron por un tema político, realizando un conflicto para que el gobierno destituyera a las máximas autoridades de la Alcaldía de Huanuni, por corrupción. En esa ocasión, utilizaron un nuevo método de lucha, extraño al proletariado del subsuelo, el bloqueo de caminos, que los campesinos indígenas del altiplano paceño y los cocaleros del Chapare y de los Yungas de La Paz utilizaron ampliamente desde el año 2000.

Por otra parte, estaba la transmisión de experiencias de los mayores a las nuevas generaciones a través de los espacios tradicionales como las asambleas y los momentos de socialización en el trabajo y fuera de la mina, así como por intermedio de la Radio Nacional Huanuni, que siguió cumpliendo su papel de fortalecimiento de la conciencia obrera a través de sus mensajes, así como de otros medios recientemente establecidos, como un canal de televisión.

Poco a poco los mineros de Huanuni recuperaron la confianza en sí mismos, pese a ser también conscientes de las transformaciones ocurridas, que siguen impactando profundamente en el presente.

A pesar de ello, Huanuni se ha sostenido como un “lugar de la memoria” que permitió la recreación de la vieja identidad minera, y, al mismo tiempo, las nuevas orientaciones al sindicalismo minero, así como su participación en la vida nacional.

Eso fue evidente tanto en los acontecimientos de octubre del año 2003, como en el profundo proceso de cambio que actualmente vive Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales.

V. LOS TRABAJADORES MINEROS EN LA “GUERRA DEL GAS” DE OCTUBRE DE 2003

La presencia en El Alto de La Paz de los 800 mineros de Huanuni¹⁴ y de más de 3.000 cooperativistas mineros¹⁵, fue altamente significativa en momentos decisivos de la insurrección popular que se desató el octubre de 2003 contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que tuvo su epicentro a esa ciudad del departamento de La Paz.

No sólo se notó la presencia, en toda la semana que duró el levantamiento popular, de los pobladores de los barrios mineros de relocalizados, principalmente de Santiago II, uno de los lugares donde se produjeron mayores enfrentamientos con el ejército, sino de trabajadores mineros asalariados y cooperativistas llegados desde Huanuni y otras minas.

Así, octubre fue sin duda un momento de revelación de “acumulaciones sociales previas”, aunque no sólo para el sector minero, sino para el conjunto de los sectores populares en Bolivia, que desde hace unos años atrás habían comenzado a movilizarse y a salir de una larga y profunda crisis.

En efecto, desde el año 2000, comenzó un radical proceso de recomposición y reestructuración de los actores sociales populares, ocupando los campesinos cocaleros del Chapare y los campesinos indígenas del Altiplano un lugar fundamental en él, aunque no

¹⁴ En la segunda parte de nuestro estudio hemos trabajado (y también presentado al COLMICH como avances de investigación) en relación al proceso de recuperación de la mina de Huanuni y del sindicalismo minero de la localidad en la década de los 90. Para 2003, solamente estaban trabajando en la mina 800 obreros, los que se trasladaron en su totalidad a El Alto, cuando esa ciudad inició la huelga y el bloqueo.

¹⁵ También explicamos en la segunda parte el crecimiento y desarrollo de las cooperativas mineras después de la relocalización, así como sus características organizativas y sus diferencias con el viejo sindicalismo minero.

se puede desconocer la fuerza adquirida por sectores urbano-populares, como en el caso de los sectores que actuaron en la “Guerra del Agua” en Cochabamba (2000).

Desde ese año, la mayor parte de los conflictos sociales desatados expresaron un profundo cuestionamiento a las políticas estatales ejecutadas desde mediados de la década de los 80, de clara orientación neoliberal, así como la paulatina identificación de los partidos tradicionales que se turnaron en el gobierno desde 1985 (MNR, ADN, MIR, NFR), como los causantes de los problemas económicos y sociales del país.

Al mismo tiempo, se fue evidenciando la emergencia de nuevos liderazgos de origen popular, principalmente de origen indígena.

La significativa y sorprendente votación obtenida en elecciones nacionales de 2002 por el Movimiento al Socialismo (MAS), dirigido por el líder cocalero Evo Morales, que obtuvo el segundo lugar y la posibilidad de ser elegido Presidente de la República, así como el apoyo de importantes sectores campesino-indígenas a la candidatura de Felipe Quispe, del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), sumaron un elemento político fundamental a este proceso.

En relación a los acontecimientos de octubre, estos estuvieron directamente relacionados con el objetivo popular de impedir la venta de gas a Chile a través de un convenio aparentemente secreto y, sobre todo, con la consigna de nacionalización de los hidrocarburos. Como se sabe, la revuelta fue de tal magnitud que provocó la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada– el 17 de octubre de ese año–, quien había apelado a la utilización de la fuerza militar y provocado decenas de muertos para conjurarla.

Cuando se determinó el bloqueo de calles y la huelga general en El Alto el miércoles 8 de octubre, todas sus entradas y salidas, con excepción de la vía que conduce al aeropuerto internacional, fueron cerradas y miles de vecinos alteños se apostaron en calles, avenidas y esquinas estratégicas en las que quemaron llantas y juntaron palos, piedras y todo tipo de trastos en auténticas barricadas.

En ese contexto, el jueves 9 de octubre, arribaron a la localidad de Ventilla los 800 trabajadores regulares de la empresa Minera Huanuni, quienes habían tenido que sortear numerosos obstáculos a su paso, sobre todo la vigilancia militar. En un enfrentamiento con el ejército a tempranas horas de la mañana murió un trabajador minero y varios otros resultaron heridos. La noticia de la muerte del minero se regó como pólvora en toda la ciudad de El Alto, exacerbando los ánimos y despertando la movilización inmediata de barrios con alta concentración de ex-mineros como Santiago II y Rosas Pampa.

Desde el viernes 10 de octubre, la huelga y el bloqueo comenzaron a adquirir un carácter insurreccional. Ese día, la negativa de los bloqueadores de dejar pasar cisternas de

gasolina destinadas a la desabastecida sede de gobierno provocó el inicio de la masacre. El sábado y el domingo siguientes, los militares continuaron disparando indiscriminadamente contra la población alteña. Los muertos se contaban por decenas.

El lunes 13, la ciudad de La Paz se sumó a la huelga y amaneció paralizada. Los transportistas participaban de la decisión y ninguna actividad funcionaba normalmente en la ciudad. Al tiempo, ésta comenzaba a sentir de manera directa la lucha popular. Ese día se descolgaron desde El Alto miles y miles de pobladores en actitud insurreccional y numerosas columnas de campesinos de comunidades de los alrededores del sur de La Paz hacían su ingreso en ella desde diferentes entradas.

El miércoles 15, la COB organizó una gran manifestación que sobrepasó toda expectativa. Más de 80.000 personas llegaron a San Francisco, donde se congregaron durante horas, después de recorrer una y otra vez las arterias céntricas de la ciudad y bordear la Plaza Murillo. Los mineros de Huanuni ingresaron ordenadamente haciendo tronar sus dinamitas mientras las columnas campesinas arribaban desde distintos puntos haciendo flamear sus whipalas. Así, aunque todos estaban juntos, las identidades particulares también se hacían sentir.

El jueves 16, un día fundamental para el desenvolvimiento de los acontecimientos de octubre, llegaba a Patacamaya, localidad situada a unos cien kilómetros de La Paz, un grupo de entre 2.000 y 3.000 mineros, la mayoría cooperativistas de Huanuni, aunque también mineros de Colquiri y otras minas pequeñas. Allí se encontraron con contingentes de campesinos de las provincias paceñas que pretendían cercar a La Paz. El ejército se trasladó rápidamente a ese pueblo rural y tuvo un enfrentamiento con los mineros en el que hubo tres muertos y seis heridos.

Las noticias provenientes de Patacamaya aumentaron la gran tensión que se vivía en esos días, mientras se producían enfrentamientos en el sur de La Paz entre militares, pobladores urbanos y campesinos, que en Ovejuyo y Chasquipampa, tuvieron como resultado varios muertos y heridos. Por otro lado, ese mismo jueves, sectores de la clase media iniciaron una huelga de hambre en diferentes templos de la ciudad, sumándose al pedido de renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Además, el movimiento comenzó a expandirse con fuerza en otros departamentos. Se vivieron jornadas masivas de movilización en Cochabamba, Sucre y Potosí. En Santa Cruz de la Sierra, miles de campesinos fueron maltratados en la plaza de esa ciudad por miembros de la Nación Camba (autonomistas de derecha), cuando llegaron allí para sumar su voz a las protestas que se desarrollaban en todo el país.

A mediodía del viernes 17 de octubre la renuncia del Presidente era inminente. Esa tarde todos esperaban el desenlace final. Por la noche, el vicepresidente Carlos Mesa

asumió constitucionalmente la Presidencia de la República. Para ganar legitimidad, Mesa prometió en el momento de posesionarse algunas medidas fundamentales: la convocatoria a un referéndum para que los bolivianos decidieran sobre el destino del gas, y a una asamblea constituyente para “refundar el país”. Decidió gobernar sin la presencia de los partidos políticos que quedaron atrincherados en el Parlamento.

El festejo fue inmenso. Abrazos entre campesinos y pobladores de El Alto, pañuelos blancos saludando el ingreso de decenas de camiones cargados de cooperativistas mineros y campesinos que bajaron de El Alto hacia San Francisco, estallido de dinamitas y flameo de wiphalas acompañadas con crespones negros. El sábado 18, dos multitudinarias concentraciones cerraban la gesta de octubre: una en San Francisco, otra en el Alto, esta última con la presencia del flamante presidente Mesa.

Ahora bien, a través de la lectura de la abundante bibliografía que ha surgido sobre los acontecimientos de octubre, por testimonios recogidos en esos días y la observación directa, entrevistas posteriores y recolección de documentación elaborada por los propios actores, pude percibir que la presencia de los mineros de Huanuni y de los cooperativistas mineros en la “guerra del gas” tuvo significados muy importantes, tanto para ellos mismos como para la población alteña y paceña.

Por un lado, para los propios mineros –tanto de Huanuni como cooperativistas– fue una suerte de reencuentro con su identidad positiva y orgullosa. Bastaba para descubrir ello observar cómo entraron a la ciudad de La Paz, perfectamente ordenados en filas de cinco en fondo, portando sus guardatojos, levantando sus puños en alto y haciendo tronar insistente dinamita en pleno centro de la ciudad.

Pero no se limitaron a actos simbólicos; durante todos los días que duró la insurrección popular reforzaron los grupos de vecinos que luchaban en El Alto contra las fuerzas militares y, en La Paz, engrosaron las multitudinarias concentraciones que se enfrentaron a policías y cercaban el Palacio de Gobierno.

En Patacamaya, los cooperativistas mineros se fundieron con los campesinos que llegaban del Altiplano al “cerco a La Paz”. Juntos convencieron a los militares que fueron a su encuentro para que los dejen pasar, no sin antes haberse enfrentado a ellos. Ese acontecimiento, para algunos analistas, desató la renuncia de Goni, pues quedó en evidencia que los militares ya no estaban respondiendo a su mando y que se había producido un encuentro fraternal entre éstos y los mineros y campesinos, lo que ocurrió en la mañana del 17 de octubre.

En cuanto a la presencia de los mineros de Huanuni, Pedro Montes, ex-dirigente de esa mina y actual secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COR) de

Oruro, después de haber encabezado la manifestación de mineros en el centro de la ciudad realizada el jueves 16 de octubre, nos dijo:

Cuando el 86, un 29 (de agosto-Marcha por la Vida y la Paz-) nos han cercado de igual forma el ejército en Calamarca, claramente, en voz alta y con un coraje alto habíamos indicado que los mineros volveríamos, y hemos vuelto nuevamente a los caminos carreteros (...).

Ahora nuevamente los mineros, por la misma senda que han abierto sus padres, por la misma senda, ellos están empezando a luchar por los intereses de la clase trabajadores, fundamentalmente también devolviéndole la esencia histórica a nuestra gloriosa Federación de Mineros (...).

Ahora tanto los compañeros (mineros), tanto los hermanos campesinos, la clase media, los obreros, estamos unidos ganando las calles para defender este interés. Por eso yo creo que el día de hoy, las marchas son totalmente de miles y miles de participantes que a su país quieren defender, esa dignidad y la soberanía nacional del país (Entrevista realizada el 16 de octubre de 2003).

Ese mismo día, un joven minero nos dijo:

Ya no creían en los mineros, pero en realidad ahora se ve que ha llegado la hora del cambio social del país" (...). Nosotros hemos ido construyendo la revolución. Lo que falta ahora es la techada final donde los bolivianos seamos gobernantes de nosotros mismos y trabajar nuestras riquezas como bolivianos, ¡dignos, pero! (Entrevista realizada en San Francisco, 16 de octubre de 2003).

Y una ama de casa llegada de Huanuni, entrevistada unos días antes mientras preparaba junto a otras mujeres de esa mina una “olla popular”, añadió:

Siempre las mujeres mineras estamos caracterizadas para poder pelear por lo que nos pertenece a todo Bolivia, no simplemente a los mineros (...). Esa es la lucha, el propósito de todo el pueblo boliviano, que tiene que hacerse una nueva Bolivia. Porque estamos aquí dos Bolivias divididas: una de los ricos y la que está mirada de poco, la de los pobres (Entrevista realizada el 9 de octubre de 2004).

Por el otro, para el conjunto de los sectores populares en lucha, la llegada de los mineros fue entendida como una especie de “garantía” para el triunfo popular, en un franco reconocimiento a su experiencia pasada, a su combatividad y, sobre todo, a su valentía y coraje.

Esto no sólo fue expresado por las dirigencias alteñas, como por uno de los líderes de las “jornadas de octubre”, Roberto de la Cruz, o por vecinos de El Alto involucrados en los hechos, sino por vecinos que simplemente observaban los acontecimientos. Tal es el caso del testimonio que citamos a continuación, que fue recogido por Verónica Navia, y que dice:

El 17 de octubre, alrededor de las tres y media de la tarde, mi mamá y yo salimos de casa. Al salir, vimos a los mineros bajar en marcha hacia el centro de la ciudad (la Plaza San Francisco) (...). Observé a los demás mineros, la mayoría con la piel morena, con los ojos hundidos y masticando coca que les daba fuerza para seguir; otros estaban fumando un cigarro, sus manos eran fuertes y callosas debido al trabajo duro que realizan por su familia. (...) vi a mis vecinos que prácticamente los regaban como a plantas desde sus terrazas; otros habían sacado tarros con agua o refrescos en bolsas preparados caseramente (...). Todos los vecinos estaban ajetreados; otros se quedaban solamente observando, pero no con temor, sino con miradas de admiración (...). Al llegar al centro de la ciudad, los mineros hacían estallar pequeños cachorros de dinamita, como si con esto nos dijeran: “Ya llegamos, ahora ya empieza la lucha”; las personas se aglomeraban para recibirlos con aplausos y animándolos a seguir adelante. Desde una esquina de la plaza San Francisco, se observaba la multitud; también se percibía que el grito silencioso que guardaban hace mucho ya había explotado (Testimonio de Verónica Quispe en: García Linera 2004: 221).

En ese mismo libro se recoge este otro testimonio:

Veíamos, desde la terraza de mi casa, pasar una extensa marcha. La gente tenía en sus manos palos, piedras y otras cosas. Pensamos que se iniciaría la guerra civil por tanta tensión que se vivía (...). Vimos llegar a los mineros que venían desde Huanuni; llegaban cansados, con la cabeza caída porque sostenían sobre ella su casco muy pesado; en sus hombros cargaban unos bultos y una cama; sus labios se veían secos y rajados. Yo observaba muy admirada como llegaban estos hombres (...). En la noche se oyeron petardos y una tremenda bulla. Salí de mi casa para ver qué pasaba. Todos los vecinos salieron. Era un grupo de jóvenes que cantaban el Himno Nacional agarrando la bandera de Bolivia; es que habían empezado a llegar camiones llenos de gente que venía de Oruro; eran mineros. Todos los vecinos se vieron realmente unidos porque sacaron panes, plátanos y todo lo que podían para dárselos a los mineros que llegaban. Pasaron ocho camiones; cada que pasaba uno de los camiones, la gente aplaudía. Ellos gritaban una frase que me alegró mucho porque se mostraba que estábamos unidos frente a estos conflictos tan dolorosos. La frase decía: “Hermano paceño, Oruro está contigo (Testimonio de Fanny Suxo en: García Linera 2004: 219).

Por otro lado, la actuación de los barrios mineros, que ha sido ampliamente reconocida, reveló su capacidad organizativa acumulada desde su llegada a El Alto en la década de los 80, su sentido de pertenencia a la comunidad alteña, su solidaridad sin límites con los compañeros mineros que llegaban y su valentía y coraje. Hay numerosos testimonios sobre el papel de los barrios mineros, principalmente en relación a Villa Ingenio y Santiago II, que se destacaron ampliamente en la “guerra del gas” y sufrieron el mayor número de bajas.

Para ilustrar algo de la febril actividad de los barrios mineros, hemos escogido el documento denominado “Cronología y hechos ocurridos en la zona de Villa Santiago II Durante la Guerra del Gas”, que fue preparado por la Junta Vecinal de la zona. Esta tiene como dirigente principal, y desde hace muchos años, a un ex-dirigente minero de Telamayu, una mina del sur de Potosí, que llegó a ocupar importantes cargos en la Federación de Mineros y fue muy cercano a Juan Lechín Oquendo, José Montecinos.

En este documento, se cuenta:

DIA JUEVES 09 DE OCTUBRE. Obedeciendo determinaciones de FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), la Junta de Vecinos de Santiago II coordina su accionar con la Asociación de la Feria Franca de nuestra zona, inicia el bloqueo este día en la Plaza El Minero y la Av. 6 de marzo a la altura de Taquiña, con una presencia masiva. Por otra parte, una cantidad apreciable de compañeros se dirige hacia Senkata para recibir a los compañeros mineros de Huanuni (...).

DIA VIERNES 10 DE OCTUBRE. Realizamos una asamblea en la Plaza El Minero, los vecinos ante los hechos del día anterior resuelven masificar los bloqueos, se aprueba realizar colecta de víveres y vituallas para los compañeros mineros de Huanuni y se nombra una comisión (...); la huelga es cumplida por todos cerrando toda clase de negocios, el mercado y otros (...).

DIA MIERCOLES 15 DE OCTUBRE. Nuestra zona sufre las consecuencias del desabastecimiento, no existe pan, gas, carne y todos los alimentos (...). Por la tarde, un contingente del ejército y la policía, dispersándose en la Av. 6 de marzo lanzan gases, disparos de bala y balines, la gente se enfurece y pretende enfrentarlos, como no había dinamita ni armamento lo hacían con piedras, impotentes de lograr objetivos de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, nuevamente caen varios heridos.

DÍA VIERNES 17 DE OCTUBRE. (...) Más de 5.000 personas, vecinos de nuestra zona, hombres, mujeres, jóvenes y niños de todas las edades salen a la Av. 6 de marzo, para ver pasar a los compañeros mineros, campesinos, universitarios, gremiales de la ciudad de Oruro y les asisten con refrescos, sándwiches y dulces

y se convierte en una fiesta de alegría y gloria. Esto dura hasta el día siguiente que siguen llegando hasta medio día (Junta de Vecinos de Villa Santiago Segundo, Cronología..., 26 de noviembre de 2003).

VI. CONSIDERACIONES FINALES

La participación de los mineros en los hechos citados no sólo reveló un reencuentro –no necesariamente estable– con su memoria, lo que contribuyó a redescubrir sentimientos positivos acerca de su rol en la sociedad boliviana y dentro de los sectores populares, sino algo quizá aun más significativo: su articulación con otros sectores sociales, con pobladores urbanos, con campesinos indígenas, con sus antiguos compañeros ahora convertidos en ciudadanos.

Estos hechos tienen mucha importancia para el futuro de los movimientos populares en Bolivia, que en las últimas décadas se han caracterizado por su dispersión, por la confrontación entre liderazgos, por la ausencia de horizontes comunes, por la falta de construcción de alternativas político-ideológicas que puedan representar a buena parte de los bolivianos y por la profunda crisis de la COB que en el pasado tuvo la capacidad de aglutinar a amplios sectores.

Octubre fue un momento de conjunción popular de vastos alcances; sin embargo, esto no quiere decir que esa perspectiva de “unidad en la diversidad” se haya consolidado, pues en el siguiente año se notaron las grandes dificultades que sobreviven para ello.

Y, en octubre de 2006, estalló una lucha fratricida entre cooperativistas y asalariados en la mina de Huanuni que volvió a poner en el tapete la profundidad de los cambios ocurridos desde 1985 en el mundo minero.

REFERENCIAS

- Artículo Primero (revista de debate social y jurídico). 2004. *Octubre en Bolivia*. Santa Cruz: CEJIS.
- Diócesis de El Alto. 2004. *Memoria Testimonial de la Guerra del Gas*. El Alto: Comisión de Hermandad, CEPAS/CARITAS.
- Ejedsgaar, Anne Marie. 1997. *Memoria social y la imagen de la comunidad de resistencia: emigrantes y sindicatos en el trópico cochabambino de Bolivia*. Ponencia presentada al 49 Congreso Internacional de Americanistas, Quito.

- FLASCO/ILDIS. 1983. *El sector minero. Crisis y perspectivas*. La Paz: Impresiones Master.
- García Linera, Álvaro. 1999. *Reproletarización. Nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia*. La Paz: Muela del Diablo.
- _____ ed. 2004. *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. La Paz: Diakonía, Oxfam.
- García Linera, Álvaro, Raúl Prada y Luis Tapia. 2004. *Memorias de Octubre*. La Paz: Comuna y Muela del Diablo.
- Guzmán, Luis. 2004. *El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia*. La Paz: H.P.D, Comuna, Indymedia.
- ILDIS. 1990. *El movimiento sindical hacia el 2000*. La Paz: ILDIS.
- Jetté, Christian. 1989. *De la toma del cielo por asalto a la relocalización*. La Paz: Hilbol.
- Junta de Vecinos Villa Santiago Segundo. 2003. *Cronología y hechos ocurridos en la zona de Villa Santiago II durante la Guerra del Gas*.
- Lazarte, Jorge. 1988. *Movimiento sindical y transformaciones del sistema político en boliviano*. México: FLACSO.
- Mamani Pablo. 2004. *El rugir de las multitudes*. La Paz: Ed. Eruwiyiri.
- Mayorga, René (compilador). 1987. *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*. La Paz: CERES, CLACSO.
- Navia, Mónica. 2004. *Y todo comenzó de nuevo. Memorias de Octubre*. La Paz: Grupo Los Cronistas.
- Polo Nájera, Teresa. 1995. *La migración intradepartamental en el departamento de Cochabamba, 1992*, Cochabamba: Centro de Estudios de la Población.
- República de Bolivia. Fondo Social de Emergencia. 1989. *Registro Nacional de Mineros Relocalizados 89*. La Paz: Fondo Social de Emergencia.
- UNITAS/PAM/C.R.S 1987. *La crisis del sector minero y sus efectos socio-económicos*. La Paz: documento mimeo.

Fuentes primarias

VI y VII Congresos de la COB.

FSTMB: Documentos sobre la “Marcha por la Vida”.

FSTMB: XXI Congreso de la FSTMB (mayo de 1986), Congreso Minero Extraordinario de Siglo XX (diciembre de 1986).

Documentos de ONGs sobre la relocalización minera.

– Documentos de la Iglesia Católica sobre la relocalización minera – Documentos de ONGs sobre los relocalizados en Cochabamba

Entrevistas

Filemón Escobar, ex dirigente minero y actual dirigente del MAS.

Evo Morales, máximo dirigente del movimiento cocalero y del MAS.

Feliciano Mamani, dirigente cocalero.

Leonilda Zurita, dirigente cocalera.

Cocaleros de base.

Roberto de la Cruz, dirigente de la COR El Alto.

José Montecinos, dirigente vecinal de la Junta de Vecinos de Santiago II, El Alto.

Pedro Montes, ex dirigente minero y secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro.

Mineros de base presentes en El Alto/La Paz (Huanuni).

Amas de Casa mineras presentes en El Alto/La Paz (Huanuni).

Mineros cooperativistas presente en El Alto/ La Paz.